

Denuncian falta de comunicación, escasa planificación y excesiva burocracia:

Instituciones que trabajan con el Estado piden unificar sistemas de rendición de gastos y mesas de trabajo

Fundaciones y proveedores dan cuenta de atrasos en pagos comprometidos, pero afirman que no necesariamente se trata de escasez de recursos fiscales, sino de problemas de la administración.

A. UGARTE Y N. CABELLO

Telefonos y correos que no se responden, documentos que se extravían y exceso de papeleo son algunos de los problemas que revelan privados que se relacionan con distintas reparticiones públicas. Son dificultades, afirman, que impactan su funcionamiento interno y también el servicio que brindan a los ciudadanos.

En el caso de proveedores, el principal problema son los pagos fuera de plazo. Pero distintas agrupaciones aseguran que la razón no es necesariamente que no exista el dinero para pagarles —para comprar, las reparticiones públicas deben tener un documento que certifica la disponibilidad presupuestaria—, sino deficiencias en la gestión.

“Si uno no está llamando para cobrar, las facturas se quedan ahí estancadas. Hay clientes a los que si no vas a cobrarles presencialmente, no pagan”, dice Claudia Jorquera, presidenta de la Asociación Gremial de Proveedores del Estado (AGPE). Cuenta que es común que órdenes de compra y facturas “no tengan los datos actualizados. Marcas el teléfono

no que aparece ahí para coordinar el despacho y puedes estar fácilmente cinco días llamando”. Y añade que reclamar no sirve porque al “Estado no le pasa nada por no pagar”.

Para Jorquera, la solución es simple: “Que hagan el ejercicio de pararse y llevar la factura de un escritorio a otro. Literalmente es eso: que firmen y pase al siguiente”.

Concuerda con lo anterior Eduardo del Solar, director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Industria de la Salud (APIS), y expone otro punto: “La planificación. No solo no nos pagan a tiempo, sino que no nos compran porque tienen un problema muy grande de gestión”.

A las fundaciones que sostienen convenios con el Estado les sucede algo similar. Los recursos de estos programas se entregan en distintas remesas y cada monto debe ser rendido por la ONG y luego aprobado por el Estado. A pesar de que son transferencias comprometidas desde el inicio del convenio, las fundaciones denuncian constantes retrasos, lo que deriva en que la siguiente remesa no sea depositada.

En fundación Pequeño Cottolengo hubo una demora de cuatro me-



Fundaciones proponen que la plataforma SISREC, de Contraloría, se amplíe a más ministerios.

ses en el pago. Según su director ejecutivo, Cristián Glenz, este atraso “puede incluso generar la muerte de personas porque no le llegó el alimento o el medicamento necesario”.

Para Liliana Cortés, directora social de Hogar de Cristo, esto es impresentable porque “no se pueden poner en pausa los proyectos”. Y la consecuencia para la institución es que hay “tensiones mensuales en los flujos de caja”. A su juicio, deben existir plazos definidos para la aprobación de recursos por parte del Estado.

Otro diagnóstico que comparten las ONG es la excesiva burocracia al momento de rendir los fondos que les entregan. Hans Rosenkranz, director ejecutivo de Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), una red de 270 fundaciones, sostiene que muchas veces se debe “reportar la misma información a distintos ministerios, departamentos o subsecretarías, con criterios diferentes, y eso hace que se duplique el trabajo administrativo”.

“La burocracia está ahogando el trabajo que se realiza en distintos es-

pacios de la sociedad civil. Existe una sobrerregulación de procesos administrativos y de rendición”, indica Arturo Celedón, director ejecutivo de Fundación Colunga.

Las organizaciones crearon una herramienta llamada FECU Social, un proyecto liderado por la COS, “en el que se genera un estándar más alto de rendición. Es el mismo documento que tienen que presentar las empresas que están en la bolsa a la CME”, indica Celedón.

Eso sí, un aspecto positivo que subraya Cortés es la plataforma web de la Contraloría, SISREC, que permite “rendir de manera eficiente y fácil”, pero que está limitada a algunos ministerios. En su opinión, esta debería ampliarse para tener un único sistema de rendición.

Para los proveedores, otro elemento a optimizar son las descripciones de productos para compras por Convenio Marco, pues dicen que muchas veces son incorrectas o poco detalladas, y los precios no corresponden a la realidad. Jorquera añade que en ChileCompra no existe una instancia para conversar y plantear solicitudes o reclamos, sino un área de “incidentes”, que califica como poco resolutiva. Por eso, creen que mesas de trabajo y un diálogo constante —que afirman hoy es escaso— podrían mejorar varios puntos.